

NUE: 34-A-2019

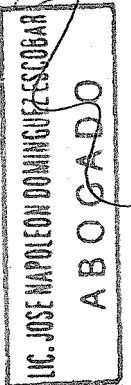
NEMA. Rindiendo Informe.
Proceso No. DAIP-026-2019

COMISIONADOS DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.

JOSÉ NAPOLEÓN DOMINGUEZ ESCOBAR, mayor de edad, Abogado y Notario,
, con Documento Único de Identidad número _____
, Numero de Identificación Tributaria _____

y Tarjeta de Abogado número _____;

actuando en calidad de Apoderado General Judicial de la Corte de Cuentas de la República; lo cual compruebo con la copia certificada de Poder General Judicial otorgado a mi favor, por la Licenciada Carmen Elena Rivas Landaverde, en su calidad de representa Legal de dicha Institución; procurando de acuerdo a las facultades contenidas en el Art. 67 numeral 3 del Código Procesal Civil y Mercantil, el cual adjunto; y en relación a la obligación establecida en el artículo 88 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) brindo Informe respecto del recurso de apelación interpuesto ante ese Instituto por el ciudadano **CARLOS EDUARDO PALOMO SOSA**, contra la resolución de las diez horas con treinta minutos del día cinco de marzo de dos mil diecinueve, emitida por la Oficial de Información de la Corte de Cuentas de la República, Licenciada Mirna Yaneth Mercado Laínez; Al respecto a ustedes **MANIFIESTO:**



EXPOSICION DE HECHOS:

Que en fecha veinte de febrero del presente año, el ciudadano Carlos Eduardo Palomo Sosa, solicito a la Unidad de Acceso a la Información Pública Institucional, requiriendo se le proporcione listado de todos los empleados de la Corte de Cuentas de la República, incluyendo para cada uno el nombre completo, cargo o puesto ocupado, salario nominal mensual y género. Lo anterior para los años 2019, 2018, 2017 y 2016. Al mismo tiempo solicita todo en formato digital y/o electrónico, que sea procesable tales como archivos csv de Excel o Word.

La Oficial de Información Institucional, Licenciada Mirna Yaneth Mercado Laínez, en cumplimiento al Art. 70 de la LAIP, por medio de nota con referencia DAIP-101-2019 de fecha veintidós de febrero del presente año, remitió a la Sub-Directora de Recursos Humanos dicha solicitud.

Con fecha cuatro de marzo de este año, la Ingeniero Xenia Marisol Aguirre de Alas, Encargada del Área de Registro y Control del Talento Humano, dio respuesta a la solicitud

de la Licenciada Mirna Yaneth Mercado Laínez, remitiendo listado de plazas asignadas en los años 2016, 2017, 2018 y 2019.

En cumplimiento al artículo 50 literal i) La Directora de Transparencia y Oficial de Información Institucional, emitió Resolución a las diez horas con treinta minutos del día cinco de marzo de este mismo año, en el Procedimiento de Acceso a la Información Pública registrado bajo REF. DAIP-026-2019, concediendo al ciudadano Palomó Sosa, el archivo digital de formato pdf, de la información brindada por el Área de Registro y Control del Talento Humano de esta Corte, la cual consiste en listado de plazas asignadas en los años 2016, 2017, 2018 y 2019.

Que en fecha cinco de marzo del dos mil diecinueve, el ciudadano Carlos Eduardo Palomo Sosa, interpuso Recurso de Apelación, en contra de la resolución DAIP-026-2019 emitida por el Oficial de Información de ésta Corte de Cuentas de la República, en el que manifiesta que la interposición del mismo, surge en vista que la Oficial en comento, no entregó la información solicitada; ya que el requerimiento inicial pretendido, es el listado de los empleados de la Corte de Cuentas de la República, incluyendo para cada uno el nombre completo, cargo o puesto ocupado, salario nominal mensual y género, de los años 2019, 2018, 2017 y 2016, de lo cual se proporcionó y notificó un listado de plazas asignadas, en las que no se detalle el nombre de las personas que las ocupan.

La omisión al no proporcionar la información solicitada, implica según el recurrente, una vulneración al derecho de acceso a la información, pues sin ninguna argumentación jurídica válida, se niega, de facto, los nombres de los empleados, sin que exista una causal de reserva o declaratoria de confidencialidad para restringir el acceso a lo pedido. Que solicitó de forma explícita que la referida información fuera suministrada en formato procesable lo cual tampoco se hizo.

CONSIDERACIONES SOBRE LOS HECHOS:

La Corte de Cuentas de la República, reconoce el derecho que tiene el ciudadano Carlos Eduardo Palomo Sosa, a requerir información, la cual se proporcionó en su momento; exceptuándose los nombres de los empleados de ésta Corte de Cuenta, así como el cargo, género y sueldo

Si bien es cierto los salarios provienen de recursos públicos, lo que conlleva a la fiscalización ciudadana al ejercicio de la función pública y el deber de rendir cuentas, es

necesario tomar en consideración que no se entrega la lista con los nombres de los empleados de ésta Corte de Cuentas, con la intención de proteger datos personales y a las personas mismas de los empleados de la Corte de Cuentas ya que, al proporcionar sus nombres, relacionando el cargo y el salario que devengan, se pone en riesgo, su seguridad e integridad personal, vida, y su patrimonio, todo ello tomando en cuenta la innegable inseguridad que actualmente vive nuestra sociedad, en la comunidades, barrios y colonias que habitan la mayoría del personal que labora en la Corte de Cuentas de la República; ya que algunos incluso han sido víctimas de extorsiones, amenazas y otras acciones tipificadas como delitos (incluso hubo un caso de muerte de un empleado y la de un familiar de otro servidor vinculados a esta problemática para citar un caso de muchos);

Aunado a dichos argumentos es de hace hincapié en que los datos omitidos son datos personales y esta información es clasificada como confidencial, según lo establecido en el Capítulo III "INFORMACIÓN CONFIDENCIAL" Art. 24 literal "c" de la L.A.I.P.; y quienes tienen la facultad de dar el consentimiento de divulgar dichos datos es únicamente el titular o dueño de los referidos datos personales o su representante, que en el presente caso es cada uno de los empleados de esta Corte; y ellos no han dado su autorización para la su entrega, por el contrario en reiteradas notas dirigidas a la Oficial de Información de esta Corte, Licenciada Mirna Yaneth Mercado Laínez; expresan la NO CONFORMIDAD con la divulgación de dichos datos personales con la finalidad de proteger la integridad física en consecuencia esta Corte tiene la responsabilidad de proteger los datos personales de sus empleados; asimismo adoptar las medidas necesarias para resguardar y conservar la información considerada como datos personales.

Por consiguiente el principio de máxima publicidad del Art. 4 letra a y 5 de la LAIP, debe conciliarse ante aquellos otros derechos que la Constitución reconoce como primordiales; a efecto de brindar protección a la seguridad y vida de los compañeros empleados; pues el derecho de acceso a la información no es absoluto, sino que está sometido a límites y restricciones en su ejercicio.

El Art. 24 del Reglamento de LAIP en relación al Art. 10 numeral 7 de la LAIP, en lo concerniente a la Información oficiosa relativa a la remuneración mensual por cargo presupuestario establece en la parte final: ***"(...) por lo cual, no será necesario aclarar el nombre de la persona que se encuentre en dicho cargo, basta con que se denomine el cargo al cual se otorgan dichas remuneraciones."***

Retomando los criterios en la base legal antes citada, se tomó a bien no consignar los nombres de los empleados, en ese sentido, la protección de datos personales como lo es



el nombre de la persona, es para proteger a los empleados de ésta Corte, ya que la información personal en controversia, al ser del conocimiento público, puede ser utilizada por terceros, de tal manera que se ponga en peligro la vida y seguridad de los empleados y su grupo familiar, afectando sus derechos, sean o no fundamentales o que sirvan para cualquier otra utilidad que en determinadas circunstancias constituya una amenaza para el empleado.

En ese orden de ideas éste Instituto en sentencia de las once horas y cinco minutos de fecha dieciocho de septiembre de dos mil ocho con referencia 25-A-2013 ha expresado que *“... el acceso a la información como la regla y la reserva como su excepción, las causas que lo podrían limitar debe -en todos los casos- ser objeto de un pronunciamiento fundado y singular al respecto.”*; ante lo cual ésta Corte ha expuesto sus motivos, y de lo cual se está resguardando la identidad de sus empleados por razones fundadas, evitando con ello el ser expuestos a ser víctimas de diferentes delitos, puesto que es de todos conocidos el alto índice delincucional de nuestro país, ya que muchos de nuestros empleados residen en los diferentes departamentos de El Salvador y específicamente en zonas de alta peligrosidad: Soyapango, Ilopango, Apopa, Tonacatepeque, La libertad, Panchimalco, Rosario de Mora, etc., entre otros; aunado a ello, algunos de los empleados se desplazan a realizan su trabajo en los diferentes municipios a nivel nacional, que en su mayoría son Auditores; se exponen a ser víctimas de diferentes peligros a raíz de los grupos delincuenciales, por estar expuesto sus nombres al conocimiento del dominio público, lo cual representa un peligro por el uso inadecuado de la información solicitada.

ACLARACIONES PERTINENTES

En el presente caso nos enfrentamos ante la protección de ciertos derechos fundamentales, que pueden ser transgredidos por exposición de los datos personales como el listado de nombres de los empleados que laboran para ésta Corte de Cuentas.

Los derechos fundamentales consagrados en la Constitución no pueden jerarquizarse en abstracto, ya que, en principio, todos poseen idéntica fuerza normativa: la que les confiere la Constitución. Por tanto, solo en el caso concreto podrán establecerse relaciones de precedencia, pero derivadas de determinadas condiciones y observables solo si estas concurren. En caso de colisión, no es posible satisfacer simultáneamente ambos, pues el ejercicio de uno conlleva la limitación del otro.

El Tribunal Constitucional español ha atribuido a las libertades de expresión e información una "posición prevalente" en el seno del ordenamiento jurídico español, justificándola precisamente en su valor institucional, y si bien se presenta muchas veces como una preferencia que se define en cada caso concreto, en la práctica las reiteradas declaraciones del mencionado Tribunal Constitucional han ido consolidando un valor superior de carácter general de las libertades informativas. Así, opone estas libertades a "todos los derechos fundamentales [e] intereses de significativa relevancia social", alcanzando en la práctica particular relevancia en lo que respecta a los derechos al honor, a la intimidad y a la imagen; más sin embargo, el caso que nos ocupa, no se fundamenta en tales circunstancias, ya que lo que se está protegiendo al no revelar los nombres de los empleados antes mencionados de sus datos personales, es el derecho a la seguridad personal y a la vida, y es evitar ser víctimas de delitos como la extorsión, etc., por los altos índices de criminalidad organizada de los cuales está siendo objeto nuestro país.

La jurisprudencia constitucional —v.gr. en la Sentencia del 24-IX-2010, proveída en la Inc. 91-2007— ha establecido que la colisión entre derechos fundamentales debe ser resuelta mediante el método argumentativo de la ponderación, el cual consiste en determinar, atendiendo a las circunstancias del caso concreto, cuál es el derecho que debe prevalecer en su ejercicio práctico. De acuerdo con esta herramienta, cuando existe un conflicto de normas iusfundamentales, debe buscarse un equilibrio entre ellas o, si dicho equilibrio no es posible, decidirse en el supuesto concreto, teniendo en cuenta sus circunstancias específicas, cuál norma debe prevalecer; y en este caso debe prevalecer el derecho de protección a datos personales, a su intimidad y su derecho a su seguridad personal y a la vida.

CONCLUSIONES:

Que el listado de los nombres de los empleados no se proporcionó, por considerar, que se pone en riesgo no solo a el empleado, sino también el de su grupo familiar, por las razones antes expresadas.

PETITORIO:

De todo lo antes expuesto, respetuosamente **PIDO:**

- Se admita el presente Informe ordenado por ese Instituto, junto con copia certificada de Poder General Judicial otorgado a mi favor.
- Se me tenga por parte en el carácter en que actúo,
- Se tenga por evacuado el Informe requerido,

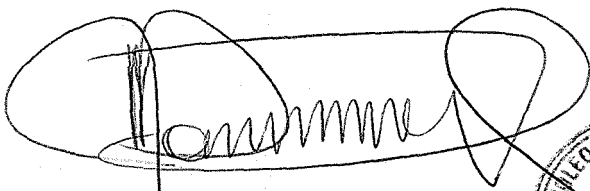
- Se siga en trámite de Ley correspondiente;
- Se confirme la resolución impugnada pronunciada por la Oficial de Información de esta Corte de Cuentas, a las diez horas con treinta minutos del día cinco de marzo del dos mil diecinueve, de conformidad al Art. 96 literal c) LAIP, por haberse emitido conforme a lo establecido en el Art. 72 letra a) de la LAIP.
- Me reserve el derecho de aportar oportunamente las pruebas correspondientes.
- Me admita como prueba notas de los diferente empleados de esta Corte, en las cuales expresan su NO CONFORMIDAD que desean que sus nombre, cargos y salario no sean revelados, por considerarlo un riesgo a su persona y que podría ser utilizado para el cometimiento de ilícitos, poniendo en riesgo tanto su seguridad personal como familiar, debido a la inseguridad social que existe en el país.
- Se agregue copia certificada de Poder General Judicial otorgado a mi favor, a las diecisiete horas del día veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, con el cual acredito la calidad con que actúo.


DIRECCION PARA OIR NOTIFICACIONES:

Fax de la Dirección Jurídica: (503) 2592-8044

Para oír notificaciones señalo las Oficinas de la Dirección Jurídica de la Corte de Cuentas de la República, Quinta planta, ubicada en Trece Calle Poniente y Primera Avenida Norte, de esta ciudad.

San Salvador, a los diez días de abril de dos mil diecinueve.





Examinado por José Napoleón Domínguez Escobar
En/on se identifica con a hora 3:58 P.m.
el 10 de Abril de 2019 junto con Informe
de Ley (art 88) 94 días útiles

